

UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DERECHO CORPORATIVO



Trabajo de Suficiencia Profesional (sustentación de expedientes) para optar el Título Profesional de Abogado/a

Informes jurídicos de los expedientes
N° 1997-44181-0-0100-J-CI-35 sobre Obligación de Dar Suma de Dinero y N° 14045-2010-0-1801-JR-CI-07 sobre Amparo Arbitral

Autora:
Natalí Juliana Pulido Del Pino

Código de la alumna:
14100048

Lima, 2021

UNIVERSIDAD ESAN

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES



**INFORME JURÍDICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

**PRIMER EXPEDIENTE
EXPEDIENTE CIVIL 1997-44181-0-0100-J-CI**

PRESENTADO POR:

**NATALÍ JULIANA PULIDO DEL PINO
CÓDIGO N°: 14100048**

**LIMA, PERÚ
2020**

I. INFORMACIÓN DEL CASO:

Expediente N°	1997-44181-0-0100-J-CI
Materia:	Civil: Obligación de Dar Suma de Dinero
Vía procedimental:	Conocimiento
Demandante:	SQM NITRATOS S.A.
Demandado:	COINSA COMERCIAL S.A.

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:

¿De qué trató el presente caso? En las siguientes líneas, procederé a realizar un recuento de los hechos más reelevantes del referido expediente:

A. DEMANDA:

- 2.1. Con fecha 24 de junio de 1997, la empresa SQM NITRATOS S.A. (en adelante, “SQM” o “el demandante”), interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero contra la empresa COINSA COMERCIAL S.A. (en adelante, “COINSA” o “la demandada”) por la suma de US\$ 1’305 402.30 (Un millón trescientos cinco mil cuatrocientos dos con 30/100 dólares americanos), provenientes de una letra de cambio constituída por la suma de US\$ 1’624,602.29. Asimismo, solicitó se le otorgue; los gastos, intereses acumulados hasta el momento efectivo del pago del monto adeudado y las costas y costos de proceso.
- 2.2. Los fundamentos de hecho que sustentaron su pretensión son los siguientes:

- SQM es una empresa que vende abonos y productos afines de agricultura. De igual manera, esta es accionista de la empresa SQM PERÚ S.A., quien se dedica a la importación y comercialización de los productos de SQM, así como a la representación de sus intereses comerciales en el Perú.
- Por su parte, la demandada fue distribuidora comercial de los productos que comercializan SQM y SQM PERÚ S.A., razón por la cual SQM le había otorgado una línea de crédito a esta empresa.
- Ahora bien, durante las relaciones comerciales entre estas tres empresas, COINSA incumplió de forma reiterada con sus obligaciones de pago. Por lo que, acordaron suscribir dos letras de cambio. La primera es la letra N° 95/037, constituida por la suma de US\$ 545,283.09, con vencimiento 30 de diciembre de 1995 y en favor de SQM PERÚ S.A. y, la segunda, es la letra N° 94/006, constituida por la suma de US\$ 1'624,602.29 con vencimiento en la misma fecha, 30 de diciembre de 1995, y también en favor de SQM PERÚ S.A. pero esta última letra se endosó en favor de la accionante, razón por la cual demandaron sólo respecto a esta última letra.
- Sin embargo, llegadas las fecha de vencimiento de pagos de las letras, la demandada volvió a inumplir con sus obligaciones de pago.
- A pesar de ello, ante las nuevas promesas de pago de la demandada y con el fin de mantener sus relaciones comerciales, SQM y SQM PERÚ S.A. no protestaron las referidas letras de cambio en su oportunidad.

- Lamentablemente, COINSA volvió a incumplir con sus obligaciones, sólo llegando a abonar la suma de US\$ 319,199.99 del total de US\$ 1'624,602.29, viendose SQM en la necesidad de interponer las acciones legales correspondientes, con el fin de lograr la tutela de sus intereses.

2.3. Los fundamentos de derecho que fundamentaron su pretensión son los siguientes:

- La demandante señala que la letra de cambio se encuentra debidamente aceptada por la demandada y, a su vez, se encuentra debidamente endosada en su favor.
- De igual manera, SQM señala que la deuda es cierta, expresa, exigible, líquida y liquidable, en lo que se refiere a gastos, intereses, costas y costos.
- Se señala que el hecho de que la deuda sea cierta y expresa se desprende de la letra de cambio.
- Respecto a la exigibilidad, se señala que la deuda es exigible porque el plazo que tenía la deudora para realizar el pago ha vencido largamente.
- Se señala que la deuda es líquida pues la liquidez se desprende de la propia letra de cambio.
- Se señala que es liquidable en el extremo de los intereses legales, comisiones y otros rubros que se generen hasta la fecha efectiva del pago.

- Asimismo, se aclara que reconocen los abonos parciales realizados por la parte deudora hasta la suma de US\$ 319,199.99. Por lo que, sólo están demandando lo referente al monto remanente.
- SQM señala que, en función a lo establecido por la Ley de Títulos Valores, el tenedor de un título tiene expedito el derecho de ejercer la acción cambiaria correspondiente o demandar por la obligación causal, para lograr el cobro de su acreencia.
- SQM trae a colación el artículo 38º de la Ley de Títulos Valores para sustentar que la letra se encuentra debidamente endosada en propiedad en su favor, por lo que siendo este el tenedor del título, se encuentra legitimado para demandar.

2.4. Finalmente, se señala que al ser el monto demandado superior a las 300 unidades de referencia procesal (se convirtió el monto demandado a soles, en función a la tasa de cambio del día en que se redactó la demanda), la vía procedimental para tramitar la pretensión es la vía del proceso de conocimiento y al ser esta una pretensión de materia civil, el juez competente para resolver la controversia es el juez civil de Lima, porque ahí domicilian las partes.

B. RESOLUCIÓN QUE ADMITE LA DEMANDA:

2.5. Mediante la Resolución N° 1 de fecha 24 de junio de 1997, el juez admite a trámite la demanda y corre traslado a COINSA para que en el plazo de treinta (30) días cumpla con contestar la demanda, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.

C. CONTESTACIÓN DE DEMANDA:

2.6. Con fecha 13 de agosto de 1997, COINSA cumple con contestar la demanda, negándola en todos sus extremos, solicitando esta sea declarada infundada en todos sus extremos, con expresa condena de costas y costos.

2.7. Los fundamentos de hecho en los que sustenta su posición son los siguientes:

- La demandada señala que la pretensión demandada es infundada, inexistente e inexigible porque el hecho de que SQM sea la endosataria del título valor no la legitima a ejercer una acción causal contra COINSA. Asimismo, señala que como el título valor no ha sido protestado, la acción cambiaria así como la obligación causal que le hubiese dado origen y fundamento, se habrían extinto de pleno derecho.
- Al respecto, la demandada señala que la obligación causal que dió origen a la emisión del título valor, era entre SQM PERÚ S.A. y COINSA y que cuando SQM PERÚ S.A. endosó el título valor, sólo endosó la acción cambiaria más no se subrogó en el lugar de SQM PERÚ S.A. en la obligación causal, por lo que no tendría legitimidad para interponer la demanda.
- De igual manera, COINSA señala que al no haber cumplido diligentemente con protestar el título valor, SQM habría culposamente extinto la obligación causal y la acción cambiaria del título valor, de conformidad con lo establecido en los artículos N° 1233, 1320 y 1329 del Código Civil y el artículo N° 49 de la Ley de Títulos Valores.

- Además, la demandada señala que lo que SQM está ejerciendo es la acción cambiaria y no la acción causal como mal ha señalado. Ello, según la demandada, se desprende del propio escrito de la demanda.
- Asimismo, COINSA señala que SQM no podría ejercer la acción cambiaria al no cumplir el título valor con todos los requisitos establecidos por ley al no haber sido este debidamente protestado, de conformidad con lo establecido por el artículo N° 124 de la Ley de Títulos Valores.
- Ahora, la demandada señala que, en el supuesto negado de que el juez considere que aún subsiste la acción cambiaria, la demandante debió haber acreditado la existencia de la obligación causal que dio origen al título valor, lo cual según esta señala no habría ocurrido en el caso concreto, para efectos de poder exigir el pago que pretende.

2.8. Los fundamentos de derecho en los que sustenta su posición son los siguientes:

- La demandada se limita a mencionar los artículos del cuerpo legal en los cuales sustenta su posición, los cuales son los siguientes:
 - a. Artículos N° 1233, 1320 y 1329 del Código Civil.
 - b. Artículos N° 49, inciso 2, 124, inciso 2, y demás pertinentes de la Ley de Títulos Valores.
 - c. Artículos N° 442, 443, 444, 478 y demás pertinentes del Código Procesal Civil.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

2.9. Mediante la Resolución N° 9 de fecha 6 de febrero de 1998, el juez de primera instancia resuelve declarar INFUNDADA la demanda bajo el fundamento de que:

- La demandante no habría cumplido con acreditar que existía una relación comercial con la demandada ni que efectivamente le había otorgado una línea de crédito a esta, producto de lo cual se emitió los dos títulos valores señalados en su oportunidad. El juez señaló que el mero hecho de adjuntar el título valor es insuficiente.
- Asimismo, el juez señala que al ser la accionante la endosaria y no la persona en favor de la cual se emitió el título valor esta tiene una carga probatoria mayor para efectos de poder pretender que se tutelen los derechos que alega tener.
- Finalmente, el juez señala que los documentos presentados de forma extemporánea, además de ser copias simples, tampoco acreditan de forma fehaciente la obligación pretendida ni mucho menos la obligación causal que dio origen a la emisión de los títulos valores. Por tanto, y de conformidad con lo señalado en el artículo N° 200 del Código Procesal Civil, resuelve declarar INFUNDADA la demanda.

E. APELACIÓN DE SENTENCIA:

2.10. Con fecha 21 de marzo de 1998, SQM presentó su escrito de apelación de sentencia, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia y se declare FUNDADA su demanda en todos sus extremos.

- 2.11. La accionante señala que el agravio que se le habría ocasionado sería el de no hacer efectivo el cumplimiento de la acreencia de la cual es titular, generando un mal precedente que podría generar un insentivo perverso a que los deudores no cumplan en el futuro con las obligaciones a su cargo.
- 2.12. La demandante señala que los fundamentos del agravio son los siguientes:

- SQM señala que, de conformidad con lo establecido por el artículo N° 1960, la demandante sí habría cumplido con acreditar su dicho (la acreencia) al haber adjuntado la letra de cambio, la cual no contaba con ninguna anotación de que hubiese sido cancelada y señalaba en favor de quién había sido emitida, el monto por el que fue emitida y a quién fue endosada, por lo que se habría cumplido con acreditar fehacientemente la acreencia que se reclama.
- Al respecto, la demandante también señala que para efectos de probar su acreencia esta también habría ofrecido como medio probatorio la declaración de parte del representante de la empresa demandada, sin embargo, este nunca fue a sabiendas de que con las preguntas del pliego iba a tener que aceptar todo lo afirmado por la demandante. Esto último, también lo tuvo claro el juez, razón por la cual en el Acta de la Audiencia de Pruebas, donde se deja constancias de las inasistencias del representante de COINSA, se señala que su conducta sería tomada en consideración al momento de resolver, cuestión que no ocurrió en el caso concreto.

- Ahora bien, SQM también señala que el juez no cumplió con valorar correctamente todos los medios probatorios aportados al proceso y es por esa razón por la cual la sentencia tuvo ese resultado desfavorable para la parte accionante.
- Asimismo, la demandante hace énfasis en que el juez no tuvo en consideración el hecho de que la parte demandada no haya cumplido con acreditar que efectivamente había cumplido con el pago del monto adeudado y que era objeto de ese proceso.
- Además, SQM también señala que el juez de primera instancia tampoco tuvo en consideración la sentencia, del otro caso (entre SQM PERÚ S.A. y COINSA), emitida respecto a la otra letra de cambio, donde si bien no hubo endoso, la letra se generó de la misma relación comercial y donde ha ocurrido lo mismo que en el presente caso, que es que la parte demandada no ha cumplido con acreditar que esta cumplió con el pago de la acreencia, por lo que la demanda fue declarada fundada. Esto último, debía ocurrir también en este caso.
- Por todos esos fundamentos es que la parte accionante requiere que se revoque la sentencia de primera instancia y se declara FUNDADA su demanda, conforme a hecho y derecho.

F. RESOLUCIÓN QUE ADMITE LA APELACIÓN:

2.13. Mediante la Resolución N° 11 de fecha 3 de abril de 1998, se concede la apelación, con efectos suspensivos, de la sentencia de primera instancia y se elevan los actuados al superior jerárquico.

G. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

2.14. Con fecha 12 de agosto de 1998, y sin que la parte demandada hubiese cumplido con absolver el traslado de la apelación, el juez de segunda instancia resolvió REVOCAR la sentencia de primera instancia y declarar FUNDADA la demanda, por los siguientes argumentos:

- El juez señaló que al haber cumplido SQM con acreditar la existencia de la deuda con el título valor y al no haber cumplido la demandada con; acreditar que había cumplido con el pago de la acreencia, limitándose durante todo el proceso a argumentar aspectos de forma que legalmente no proceden, al no haber asistido a la audiencia de conciliación y puntos controvertidos y al no haber asistido su representante a la audiencia de pruebas, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y declarar la demanda fundada en todos sus extremos.

H. APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

2.15. Habiendo tomado conocimiento de la sentencia de segunda instancia que revoca la sentencia de primera instancia, COINSA procedió a interponer un recurso de casación en los siguientes términos:

- La parte apelante señala en su escrito que el fundamento de su recurso de casación se encuentra en la vulneración del artículo N° 282 del Código Procesal Civil. Al respecto, COINSA señala que el juez habría realizado una interpretación ligera y antojadiza de tal artículo, condenándolos injustificadamente al pago de una acreencia que no se encontraría debidamente acreditada.

- Además, sobre el particular COINSA también señala que el juez no habría considerado ni valorado adecuadamente los argumentos expuestos en su contestación de demanda, los mismos que señalaban que SQM no tenía acción causal alguna al ser sólo la endosataria y haber la propia acreedora de la deuda cancelado la deuda, por causas atribuibles a ella misma, al haber perjudicado el título valor materia de la controversia.
- Por otro lado, la demandada señala que en el caso concreto la sentencia de segunda instancia no habría tenido en consideración hechos fehacientes para efectos de resolver sino meras presunciones y supuestos, respecto a los cuales hay varios razonables y sustentados argumentos en contra.
- El apelante señala que el artículo N° 282 del Código Procesal Civil debe aplicarse de forma excepcional y supletoria, sólo cuando existan otros elementos probatorios e indicios razonables que sirvan al juez para fundamentar su fallo, de lo contrario debería aplicarse el artículo N° 196, como debió ocurrir en ese caso.
- Por último, COINSA también señala en su escrito que el juez habría incumplido con aplicar el artículo N° 1233 del Código Civil, según el cual el título valor se cancela por causa imputable al acreedor, como sería, según señala COINSA, la falta de protesto del título valor que se pretende ejecutar (acto negligente – culpa leve). De igual manera, se habría cancelado su derecho a interponer un acción causal al endosar el título valor a una parte ajena a la de las partes que causaron la emisión del mismo, siendo estas SQM PERÚ S.A. y COINSA. Es así que, según señala la accionante, el título habría quedado extinto de pleno derecho.

- Ahora bien, COINSA cumple con señalar que los fundamentos de derecho de su recurso son los artículos N° 384,385,386,387,388, 396 y demás artículos que sean aplicables a ese caso. Así como el artículo N° 1233 del Código Civil, mencionado previamente.

I. RESOLUCIÓN QUE DECLARA PROCEDENTE LA CASACIÓN:

2.16. Con fecha 19 de noviembre de 1998, la Corte Suprema emitió una resolución declarando procedente el recurso de casación, al este cumplir con todos los requisitos establecidos por ley (señalar cómo se contravino el debido proceso, el perjuicio que le habría ocasionado la sentencia y el error in iudicando que habría cometido el juez). Sin embargo, hacemos la acotación de que respecto a la causal in procedendo se declaró improcedente, por esta basarse en la valoración de las pruebas y hechos realizada por el juez, cuestión que es ajena al recurso de casación.

J. CASACIÓN:

2.17. Con fecha 25 de mayo de 1999, la Corte Suprema resolvió el recurso de casación declarándolo INFUNDADO y, por ende, no casar la sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos:

- La norma, el artículo N° 1233 del Código Civil, guarda silencio respecto a si este se cancela por el endoso a terceros.
- Sobre el particular, los doctrinarios han comentado que puede cancelarse la obligación cuando se trata de documentos al portador o a la orden, suscritos o girados por terceras personas y transferidos por el deudor al acreedor pero no cuando el mismo acreedor hubiese el

mismo girado a letra a su nombre y esta haya sido aceptada por el deudor, como sucedió en este caso. Por tanto, no es posible casar por la falta de aplicación del artículo N° 1233 del Código Civil.

- Finalmente, la sala señala que la casación no denuncia la falta de aplicación del artículo N° 18 de la Ley de Títulos Valores, referida a la titularidad de la acción del derecho. Por lo que, no se puede pronunciar sobre el particular, al sólo poder la Corte Suprema pronunciarse sobre las causales expresamente señaladas por la parte apelante.

III. TEMAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES:

A. LA RELACIÓN CAUSAL EN LOS TÍTULOS VALORES:

El primer tema jurídicamente relevante es la relación causal en los títulos valores pues es uno de los principales temas que cuestiona la parte demandada a la parte accionante a lo largo de todo el proceso.

B. LA ACCIÓN CAMBIARIA EN LOS TÍTULOS VALORES:

El segundo tema jurídicamente relevante es la acción cambiaria de los títulos valores pues al momento de contestar la demanda, la demandada alega que la acción que pretendería ejercer la demandante no es una acción causal sino una acción cambiaria.

C. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 1233 DEL CÓDIGO CIVIL:

El tercer tema jurídicamente relevante es la aplicación del artículo N° 1322 del Código Civil, pues en función a ese artículo es que en una primera oportunidad se cuestiona los argumentos contenidos en la

demanda y es, posteriormente, con ese mismo artículo que la demandada fundamente su recurso de casación.

IV. MI POSICIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS TEMAS JURÍDICOS RELEVANTES:

a) RESPECTO A LA RELACIÓN CAUSAL EN LOS TÍTULOS VALORES:

En primer lugar, corresponde hacer un análisis respecto a si efectivamente la parte demandante estaba accionando el aparato jurisdiccional en función a la relación causal que esta tenía con COINSA o si, como señala la demandada, ésta estaba ejerciendo la acción cambiaria, la misma que de encontrarse contenida en un título ejecutivo y contar con todos los requisitos exigidos por ley, debía de ser tramitada mediante un proceso de ejecución.

Para efectos de realizar el referido análisis, primero debemos de determinar qué se entiende como relación causal en el ámbito de los títulos valores.

Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina nos dicen sobre el particular que; *“Es importante tener presente que la obligación de pago de un título valor no nace nunca de la nada. Todo título valor, que contiene una orden o promesa de pago, en tanto es representativo de un derecho de crédito, tiene origen en una relación preexistente. **En efecto, quien recibe un título valor que contiene una orden o promesa de pago, lo hace siempre en virtud de un derecho derivado de una relación anterior. A dicha obligación se le conoce como la obligación causal o primitiva.**”*¹ (el subrayado y énfasis es mío)

Por su parte, el profesor Felipe Osterling Parodi señaló respecto a las obligaciones contenidas en los títulos valores que:

¹ Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina. Los efectos Pro soluto y Pro solvendo de la entrega de Títulos Valores. Pg. 2

*“Ante la entrega de un título valor podemos distinguir dos obligaciones distintas que son independientes y autónomas la una de la otra. Por un lado, la obligación causal y, por el otro, la obligación cambiaria. **La primera tiene su origen en la relación causal de la que se deriva la entrega del título valor,** mientras la segunda deriva del título valor mismo.”² (el subrayado y énfasis es mío)*

Por su parte, María de los Ángeles Pérez Albuquerque nos dice sobre este tema que:

*“(…) **llegado el vencimiento de la letra, ante el impago de ésta, el acreedor podrá** ejercer las acciones cambiarias frente a los obligados en la letra; pero igualmente frente al transmitente del título, **el acreedor “ex causa” podrá ejercitar la acción causal con base en la obligación primitiva.**”³ (el subrayado y énfasis es mío)*

Por tanto, tenemos que la acción causal surge de la relación originaria que hubo entre las partes, la misma que dio origen a la emisión del título valor. Esta, es susceptible de ser ejercida al momento de que el título valor no es pagado, teniendo el tenedor del título valor la potestad de ejercer o al acción causal, para efectos de tener una sentencia declarativa, o de ejercer una acción cambiaria, para efectos de ejecutar su título.

En este caso, tenemos que la demandante optó por ejercer la acción causal, procediendo debidamente con interponer su demanda ante la vía del proceso de conocimiento, con el fin de que se emita una sentencia declarativa que reconozca la acreencia de la que ésta es titular, en función de la obligación causal que dio origen a la emisión del título valor.

Al respecto, señalo que estoy de acuerdo con la decisión tomada por la parte demandante puesto que era su facultad decidir si interponía una acción causal o una cambiaria y esta optó por la primera opción,

² Felipe Osterling Parodi. El pago con Títulos Valores. Pg. 1.

³ María de los Ángeles Pérez Albuquerque. La acción causal. Pg. 463.

siendo su accionar conforme a derecho. Asimismo, señalo que, como veremos en el siguiente punto, es claro que esta parte no estaba ejerciendo ni podía ejercer la acción cambiaria porque no cumplía con los requisitos establecidos por ley para poder hacerlo.

b) RESPECTO A LA ACCIÓN CAMBIARIA EN LOS TÍTULOS VALORES:

En el presente caso, y como señalamos en el punto anterior, COINSA señaló que lo que pretendía la demandante no era ejercer una acción respecto a la relación causal sino que pretendía ejercer una acción cambiaria.

Para efectos de determinar si lo señalado por la parte demandada era verdad, primero tenemos que determinar qué se entiende por acción cambiaria.

En palabras de Enrique Vigil Oliveros y Diana Uchuypuma Tupia la acción cambiaria es:

*“La facultad que tiene el tenedor para exigir al deudor el pago de la obligación contenida en un título valor a través de la vía judicial, esto quiere decir que **el acreedor del título podrá pedir tutela jurisdiccional (intervención del estado) para ser exigible el monto consignado en el título cambiario.***

*En ese mismo sentido, se debe señalar que **la acción cambiaria tiene dos connotaciones: una sustancial y la otra procesal. La primera está vinculada a la pretensión cambiaria, esto quiere decir el derecho sustancial del tenedor de obtener el pago; mientras que la segunda responde a la intervención del estado, quien tutelaré la pretensión jurídica material interpuesta por el tenedor.***

*En ese mismo orden de ideas, **mientras el tenedor mantenga la relación cambiaria, podrá exigir la obligación cartular en el***

Proceso Único de Ejecución, de lo contrario, tendrá que acudir a otra vía judicial.”⁴ (el subrayado y el énfasis es mío)

Por su parte, Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina, nos dicen respecto a los títulos valores y a la acción cambiaria que:

“Un título valor que contiene una orden o promesa de pago, es un documento que otorga a su titular el derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación de pago, en los términos contenidos en él.

Frente a este derecho contenido en el título, existe siempre la obligación de un sujeto de satisfacerlo. Esta obligación es conocida como la obligación cambiaria. Así, frente al derecho contenido en una letra de cambio, existe la obligación del girado (aceptante) de pagar la letra en su fecha de vencimiento (...)”⁵ (el subrayado y el énfasis es mío)

Entonces, tenemos que la acción cambiaria es la promesa de pago contenida en un título valor. Siendo este último, en palabras del profesor Avendaño; “documentos representativos de una declaración unilateral de voluntad, eminentemente transmisibles, por cuya virtud el otorgante asume obligaciones frente a un sujeto activo a veces indeterminado. Estas obligaciones resultan de la emisión del título y se hacen efectivas en su circulación.”⁶

Ahora bien, teniendo claro qué es una acción cambiaria, corresponde determinar si los acreedores de la misma deben cumplir con alguna formalidad para efectos de poder ejercerla.

Al respecto, señalo que sí pero sólo en el caso de los títulos valores a la orden, que son los títulos valores emitidos en favor de una persona determinada y que pueden ser transmitidos mediante endoso.

⁴ Enrique Vigil Oliveros y Diana Uchuypuma Tupia. Las acciones cambiarias y extracambiarias de los Títulos Valores. Revista: Lumen. Lima. Pg. 110-111

⁵ Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina. Los efectos Pro soluto y Pro solvendo de la entrega de Títulos Valores. Pg. 2

⁶ Jorge Avendaño V. Los Títulos – Valores. Pg. 7

En este proceso, nos encontrábamos ante un título valor a la orden, por lo cual para poder ejercer la acción cambiaria, el acreedor, que en este caso era SQM porque SQM PERÚ S.A. le había endosado el título valor, debía cumplir con una formalidad y esa era el protesto.

El protesto es, en palabras de Piero Augusto Da Giau Roose:

“(…) una diligencia notarial o judicial que tiene por finalidad dejar constancia de la falta de aceptación o de pago de un título valor. Esta diligencia cumple con dos funciones importantísimas, la primera está referida a la función probatoria que permite acreditar que el título valor no ha sido aceptado o pagado, mientras que la segunda función se denomina la función conservativa. Esta última lo que conserva es la acción, específicamente la acción cambiaria, (…).”⁷
(el subrayado y el énfasis es mío)

Sin embargo, como sabemos de la propia descripción de los hechos del caso realizada por la parte demandante, ello no se hizo, razón por la que SQM no podía ejercer la acción cambiaria y, por tanto, se veía impedida de recurrir a un proceso ejecutivo para efectos de ejecutar su título valor.

Es por esto último, que SQM recurrió a la vía judicial del proceso de conocimiento para efectos de solicitar el pago de la acreencia de la cual presuntamente era titular, interponiendo para dichos efectos una pretensión de obligación de dar suma de dinero.

En ese sentido, señalo que concuerdo con la vía procesal utilizada por la parte accionante, pues al ésta no haber cumplido con los requisitos establecidos por ley para preservar la acción cambiaria, esta no tenía otra opción que recurrir al proceso de conocimiento para obtener la tutela de sus derechos.

Por tanto, también estoy de acuerdo en que se haya admitido a trámite la demanda, por la pretensión y en la vía en que estas fueron presentadas.

⁷ Piero Augusto Da Giau Roose. La omisión del dolo por parte del legislador en el supuesto de hecho del Artículo 1233° del código civil. Revista: Lumen. Lima. Pg. 85

c) RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 1233 DEL CÓDIGO CIVIL:

Ahora bien, en el presente caso, la parte demandada trajo a colación la aplicación del artículo N° 1233 del Código Civil para efectos de sustentar su argumento de que la obligación contenida en el título valor se encontraba extinta y, por tanto, no había acreencia alguna vigente, debiéndose declarar infundada la demanda.

Al respecto, COINSA señaló, en su oportunidad, de que SQM estaría incurriendo en la segunda causal contenida en el referido artículo, al no haber cumplido con protestar el aludido título valor. Asimismo, señaló la demandada que la obligación causal habría quedado extinta a causa del endoso del aludido título.

Ahora, ya que ese argumento también fue usado para sustentar su recurso de casación, el mismo también fue analizado por la Corte Suprema, señalando esta institución sobre el particular que;

- La norma, el artículo N° 1233 del Código Civil, guarda silencio respecto a si este se cancela por el endoso a terceros.
- Sobre el particular, los doctrinarios han comentado que puede cancelarse la obligación cuando se trata de documentos al portador o a la orden, suscritos o girados por terceras personas y transferidos por el deudor al acreedor pero no cuando el mismo acreedor hubiese el mismo girado a letra a su nombre y esta haya sido aceptada por el deudor, como sucedió en este caso. Por tanto, no es posible casar por la falta de aplicación del artículo N° 1233 del Código Civil.

Entonces, siendo que la interpretación y aplicación de este artículo fue bastante controvertida, y ya que esta es la base de la decisión en sede de casación, procederé a analizar el referido artículo.

El artículo N° 1233 del Código Civil señala que:

Pago con títulos valores

Artículo 1233.-

La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario.

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. (el subrayado y el énfasis es mío)

De una lectura de este artículo, afirmo que, a mi parecer, la norma no te da mucha claridad respecto a los casos en que efectivamente la obligación queda cancelada. Por tanto, considero pertinente remitirme a la doctrina calificada para efectos de poder determinar si lo señalado por COINSA era correcto o si, por el contrario, la sala en sede de casación tiene la razón, habiendo fallado conforme a derecho.

Respecto a este artículo, los doctores Felipe Osterling Parodi y Alfonso Rebaza González, nos dicen en su artículo titulado “Damocles y el fundamento de la sanción del artículo N° 1233 del Código Civil” que, a lo largo de los años, dentro de doctrina y la jurisprudencia nacional se han desarrollado dos tesis respecto a las sanciones contenidas en el artículo de la referencia.

La primera tesis señala que para que un título valor quede cancelado, este necesariamente tiene que haber sido circulado, eso quiere decir que el título valor tiene que haber sido endosado para que la obligación

causal se extinga o, en otras palabras, que la obligación causal primitiva se cancele.

En esta línea argumentativa se encuentra uno de los argumentos esgrimidos por COINSA, quien señaló tanto en su escrito de contestación de demanda como en su escrito de apelación, que la obligación causal primigenia habría quedado extinta en el momento en que SQM PERÚ S.A. le endosó el título valor a SQM, la demandante en el proceso que estamos analizando.

Bajo esta primera tesis, efectivamente, la obligación causal primigenia habría quedado extinta, pues el título valor entró en circulación al ser endosado a la orden de SQM, extinguiéndose de pleno derecho el derecho de acción causal que tenía SQM PERÚ S.A., quien fuese la acreedora de la relación que dio origen a la emisión del título valor a la orden.

Por otro lado, tenemos que la segunda tesis que se maneja sobre el particular, nos dice que independientemente de que el título valor haya sido circulado o no, si el acreedor, que es la parte interesada en hacerse del cobro de la deuda, no cumplió con sus obligaciones, como son realizar las formalidades establecidas por ley, como es el acto de protesto, el título valor queda cancelado de pleno derecho.

Pues bien, esta segunda tesis se encuentra reflejada en el segundo argumento alegado por COINSA para efectos de cuestionar la demanda y la sentencia de segunda instancia. La parte demandada señaló que, como efectivamente lo admite y afirma la parte demandante, SQM no cumplió con realizar el protesto, el cual es un requisito establecido por ley y una obligación del acreedor para efectos de poder conservar la acción cambiaria del título valor, ya que de no realizarse el título queda cancelado de pleno derecho.

Esto último, también ocurrió en el caso concreto y ni siquiera era necesario solicitar medio probatorio alguno pues la propia parte demandante lo reconoce desde su escrito de demanda.

Entonces, tenemos que ya sea en aplicación de la primera tesis o de la segunda, la cual es de preferencia de los doctores Osterling y Rebaza, el título valor de SQM ya se encontraba cancelado de pleno derecho.

Al respecto, me permito citar una reflexión señalada por los doctores Osterling y Rebaza sobre el artículo en discusión:

“El artículo 1233° “está destinado a proteger al acreedor diligente, manteniendo en vigencia la obligación primitiva que se pretendió extinguir con documentos que no se pagaron a su vencimiento. También está destinado a proteger al deudor de la negligencia del acreedor, cuando éste, por su culpa, permitió que se perjudicaran tales documentos”⁸

Creo que esta reflexión resume perfectamente la razón de ser de la norma y nos permite entender que la lectura del artículo en discusión se debe dar en el sentido de que el mismo si bien busca proteger las dos acciones que tiene el acreedor (la acción causal y la acción cambiaria), esta también busca balancear la situación de las partes imponiéndole cargas al acreedor, las mismas que tienen el incentivo de cumplir si no quiere que sus derechos queden extintos de pleno derecho, como sucedió en el presente caso.

De igual manera, considero pertinente en este punto traer a colación lo señalado por el profesor Da Giau respecto a la importancia del protesto:

*“El protesto, por lo anteriormente señalado, **no solo es una diligencia destinada a la acreditación de un hecho y la conservación de las***

⁸ Felipe Osterling Parodi y Alfonso Rebaza González. Democles y el fundamento de la sanción del artículo Nº 1233 del Código Civil. Pg. 13.

acciones cambiaria, sino que asimismo plasma el deber de diligencia del tenedor del título valor. Este deber de diligencia ha sido desarrollado por el maestro De Eizaguirre, J (2003:299) “El deber de diligencia, que actúa en contrapartida del mantenimiento en su integridad de los derechos derivados de la letra, consiste en la presentación de la letra al pago dentro de plazo y subsiguiente levantamiento de protesto o sus subrogados legales”.

Significa entonces que el tenedor de un título valor a la orden y sujeto al protesto tiene no solamente un derecho a su favor en su calidad de beneficiario, sino que también debe desplegar una conducta diligente destinada a protestar el título valor dentro de los plazos previstos. El no protesto generará el perjuicio del título valor, por tanto no se verificará la función probatoria ni la función conservativa del instrumento. Adicionalmente, tal como estamos analizando, será de aplicación en su caso, el artículo 1233° del Código Civil.”⁹ (el subrayado y el énfasis es mío)

En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo aquí desarrollado, podemos afirmar que, tanto la Corte Superior como la Corte Suprema que vieron este caso, aplicaron erróneamente el artículo N° 1233 del Código Civil, debiendo haber declarado INFUNDADA la demanda al haberse configurado las circunstancias previstas dentro de las causales de sanción del aludido artículo.

Sin perjuicio de ello, quisiera también resaltar que, a mi parecer, hubo una muy deficiente motivación de la decisión en sede de casación, la misma que es fácil de advertir ante la corta extensión de la sentencia casatoria. Esta cuestión me llama poderosamente la atención considerando que nos encontramos ante un tema con cierta complejidad y que reviste de varias posiciones en la doctrina y la jurisprudencia, debiendo haberse desarrollado de manera más completa, independientemente de la decisión que iba a ser tomada por el tribunal.

V. CONCLUSIONES:

⁹ Piero Augusto Da Giau Roose. La omisión del dolo por parte del legislador en el supuesto de hecho del Artículo 1233° del código civil. Revista: Lumen. Lima. Pg.85-86.

- En conclusión si bien la demandante podía demandar mediante la interposición una acción causal, en vez de mediante la activación de una acción cambiaria en un proceso de ejecución, su pretensión no debió ser declarada fundada al ésta calzar dentro de los supuestos previstos dentro del artículo N° 1233 del Código Civil, el mismo que contempla las causales de cancelación del título valor de pleno derecho.
- De igual manera, concluimos que, sin perjuicio de la posición que haya optado la Corte Suprema, es evidente que la motivación de su decisión fue muy deficiente, cuestión que no debería suceder en una instancia como es la casatoria.

VI. BIBLIOGRAFÍA:

- **Felipe Osterling Parodi. El pago con Títulos Valores.**
- **Felipe Osterling Parodi y Alfonso Rebaza González. Democles y el fundamento de la sanción del artículo N° 1233 del Código Civil.**
- **Enrique Vigil Oliveros y Diana Uchuypuma Tupia. Las acciones cambiarias y extracambiarias de los Títulos Valores. Revista: Lumen. Lima.**
- **Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina. Los efectos Pro soluto y Pro solvendo de la entrega de Títulos Valores.**
- **Jorge Avendaño V. Los Títulos – Valores.**
- **María de los Ángeles Pérez Albuquerque. La acción causal.**
- **Piero Augusto Da Giau Roose. La omisión del dolo por parte del legislador en el supuesto de hecho del Artículo 1233° del código civil. Revista: Lumen. Lima.**

UNIVERSIDAD ESAN

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES



**INFORME JURÍDICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

**SEGUNDO EXPEDIENTE
EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL 14045-2010-0-1801-JR-CI-05**

PRESENTADO POR:

**NATALÍ JULIANA PULIDO DEL PINO
CÓDIGO N°: 14100048**

**LIMA, PERÚ
2020**

I. INFORMACIÓN DEL CASO:

Expediente N°	14045-2010-0-1801-JR-CI-05
Materia:	Acción de Amparo
Demandante	Giovanni Mario Paredes Ruiz
Demandado:	Luis Alberto Livelli Matos
Litisconsortes Facultativos (demandados)	<ul style="list-style-type: none">• SACIP Comercial Industrial Peruana S.A.C.• Flotal Construcciones Logísticas y Servicios S.A.C.

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:

¿De qué trató el presente caso? En las siguientes líneas, procederé a realizar un recuento de los hechos más reelevantes del referido expediente:

A. DEMANDA:

- 2.1. Con fecha 4 de junio del 2010, el señor Giovanni Mario Paredes Ruiz interpuso una demanda de Amparo Arbitral contra el Laudo Arbitral emitido por el árbitro, el señor Luis Alberto Livelli Matos, ante el Juez Constitucional de la corte Superior de Justicia de Lima, solicitando: “SE REPONGAN LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL”, al señalar que el referido Laudo lesiona su derecho de propiedad, su derecho de defensa, al debido proceso, al haberse realizado el abuso del derecho y actos arbitrarios, en vulneración de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.

2.2. Los fundamentos de hecho que sustentan la referida demanda son los siguientes:

- El demandante señala que él es socio mayoritario de la empresa SACIP, la misma que ostenta la licencia del Camal de Yerbateros, y propietario del inmueble ubicado en la Av. Nicolás Ayllón N° 1211, 1215, 1217 y 1219, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, e inscrito en la Partida N° 49047178 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
- Asimismo, señala que los referidos inmuebles se encuentran en administración provisional por parte de la señora Blanca Paredes Cordova, en función a lo resuelto en la Resolución N° 08 del Cuaderno Cautelar por el 45° Juzgado Penal de Lima (Exp. N° 2600-2009). Y, los mismos se encuentran prohibidos de ser gravados en función de lo dispuesto en la Resolución N° 09 del Cuaderno Cautelar del mismo expediente penal.
- Sin embargo, en el Laudo Arbitral cuestionado, el árbitro único, resolvió:
 - 1) Ceder la administración judicial a una empresa denominada Flotal Construcciones Logística y Servicios (en adelante, “Flotal”).
 - 2) Ceder la posesión por tiempo indeterminado del inmueble ubicado en la Av. Nicolás Ayllón N° 1211, 1215, 1217 y 1219, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima.
- Al respecto, señala que este no tuvo conocimiento del inicio del proceso arbitral, pues nunca se le habría

ocultado el mismo mediante la no notificación de este ni permitirsele su participación en el referido proceso. Y, que recién cuando se buscó la inscripción del cuestionado Laudo es que tuvo conocimiento del proceso señalado.

- Finalmente, se señala que la utilización de árbitros abusivos es una práctica común de la señora Blanca Paredes, quien habría vendido en otra oportunidad otro de los inmuebles, de los cuales era co propietario, sin su autorización.

2.3. Los fundamentos que sustentan la admisibilidad del recurso:

- Respecto a la admisibilidad del recurso de Amparo Arbitral, el demandante señala que dentro de los supuestos establecidos por el Tribunal Constitucional para que se admita una demanda de Amparo Arbitral, ellos no habrían contemplado los casos en los cuales el perjudicado no fue parte del proceso arbitral y, como consecuencia de ello, se vió impedido de primero cuestionar estos actos dentro del proceso y, luego, mediante un recurso de anulación del laudo, debiéndose declararse procedente su recurso.
- Asimismo, respecto a la admisibilidad, señala que el referido recurso se está interponiendo dentro del plazo de sesenta (60) días, establecido por ley, desde que tomó conocimiento del laudo que le causa afectación y que este debe declararse procedente al ser la única vía por la cual puede cuestionar el referido laudo.

2.4. Por último, los fundamentos de derecho que sustentan la demanda, son los siguientes:

- El demandante sustenta su pretensión en la violación del artículo N° 671 del Código Civil, el mismo que señala las obligaciones del administrador, en este caso, las que tenía la señora Blanca Paredes en función a lo dispuesto en el expediente penal.
- De igual manera, el demandante sustenta su pretensión en el artículo N° 2, 3, 103 y 139 de la Constitución Política del Perú. Así como en los artículos N° 37, 44 y 46 del Código Procesal Constitucional

B. RESOLUCIÓN N° 1 – IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA:

2.5. Mediante la Resolución N° 1 de fecha 08 de setiembre de 2010, el juez declara improcedente la demanda de amparo arbitral bajo el sustento que existe otra vía igualmente satisfactoria donde puede ser visto el agravio, que es la vía de la anulación del laudo, la cual es competencia de las Salas Civiles con Sub Especialidad en lo Comercial o las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia del lugar del arbitraje, de conformidad con lo establecido en numeral 2 del artículo N° 5, así como los artículos 42° y 47° del Código Procesal Constitucional y el numeral 4 del artículo N° 8 y el artículo 62° de la Ley de Arbitraje.

2.6. Asimismo, en la referida resolución se señala que la vía del amparo no es una supra instancia jurisdiccional donde se puedan revisar las decisiones aportadas por órganos constitucionales a fin de que sean revisadas pues eso no correspondería a su naturaleza restitutiva.

C. APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 1:

- 2.7. Mediante su escrito de fecha 17 de setiembre de 2010, el demandante apela la Resolución N° 1, solicitando la misma se revoque y sea declarada nula por el superior jerárquico alegando que esta agravia su derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y contraviene el debido proceso al haber renunciado el juez a la competencia material del caso en cuestión.
- 2.8. Al respecto, el demandante señala que la Ley de Arbitraje no señala cuál es la vía idónea ante un caso de fraude procesal como el sucedido en dicho caso, por lo que de conformidad con el inciso 8 del artículo N° 139 de la Constitución Política del Perú, al juez le corresponde administrar justicia ante el vacío o defecto de la Ley, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
- 2.9. Asimismo, el demandante señala que al juez constitucional le corresponde revisar la constitucionalidad de los actos, máxime si se considera que el propio Tribunal Constitucional ha dispuesto que corresponde la intervención de un juez constitucional cuando se vulnera un derecho procesal de rango constitucional o una norma constitucional sustantiva que puede tener implicancias procesales y que el presente caso no se encuentra enmarcado dentro de un precedente vinculante.
- 2.10. Por último, el demandante vuelve a reiterar que la vía del Amparo es la única vía idónea al no haber tenido conocimiento del proceso arbitral hasta que se pretendió la publicidad del Laudo Arbitral, por lo que no pudo cuestionar la afectación de sus derechos en el mismo proceso ni su afectación se encuentra prevista dentro de los supuestos contemplados por la norma para interponer un recurso de Anulación de Laudo. De igual manera, resalta que no se le está solicitando al Tribunal Constitucional la emisión de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo sino que retrotraigan las actuaciones hasta el momento

en que se instaló el proceso, que es cuando ocurrió su afectación.

D. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA APELACIÓN DEL AUTO:

2.11. Mediante la Resolución N° 1 de fecha 30 de setiembre de 2010, la Segunda Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar NULA la Resolución N° 1 de fecha 08 de setiembre de 2010, la misma que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Giovanni Mario Paredes Ruiz, y ordenó al juez de primera instancia renovar el acto procesal viciado , procediendo a dictar una nueva Resolución.

2.12. El fundamento de la decisión señalada en el párrafo precedente fue que el juez de primera instancia no tomó en cuenta que el accionante no pudo ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, del cual se desprende el derecho de defensa, al no haber sido emplazado en el proceso arbitral cuestionado y que en la Resolución apelada no se tomó en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional para efectos de calificar la demanda, incurriéndose así en la causal de nulidad insubsanable contenida en el artículo N° 171 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar de la misma disposición normativa.

E. RESOLUCIÓN N° 5 - ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA:

2.13. Con fecha 28 de enero de 2011 se emitió la Resolución N° 5, la cual admitía a trámite la demanda de amparo al señalar que la misma cumplía con los requisitos señalados por los artículos N° 42 y 53 del Código Procesal Constitucional y se tuvo por ofrecidos los medios probatorios contenidos en esta.

F. APERSONAMIENTO DEL DEMANDADO (EL ÁRBITRO) AL PROCESO:

- 2.14. Mediante sub escrito de fecha 31 de julio, el árbitro único se apersonó al proceso, limitándose a señalar su domicilio procesal mediante su escrito.

G. RESOLUCIÓN Nº 13 - INCORPORACIÓN DE SACIP:

- 2.15. Mediante la Resolución Nº 13 de fecha 08 de setiembre de 2011, el juez del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió incorporar de oficio al proceso a la Sociedad Anónima Comercial Industrial Peruana – SACIP, representada por su Gerenta General, la señora Blanca Rosa Paredes Córdova, en calidad de Litisconsorte Facultativo bajo el fundamento de que la Gerenta de SACIP (en adelante, “SACIP”) habría adoptado la decisión comercial objeto del Laudo Arbitral cuestionado, por lo que tendría un interés relevante en juego en ese proceso.
- 2.16. De igual manera, en esta Resolución se señaló que el juez puede incorporar a esta persona jurídica de oficio en razón de velar por la tutela jurisdiccional de esta y en virtud al principio de Dirección Judicial del Proceso e Impulso de Oficio, previsto en el artículo III del Código Procesal Constitucional.

H. RESOLUCIÓN Nº 14 - INCORPORACIÓN DE FLOTAL:

- 2.17. Mediante la Resolución Nº 14 de fecha 14 de setiembre de 2011, el juez resolvió incorporar de oficio al proceso a la empresa Flotal Construcciones Logísticas y Servicios S.A.C., en calidad de Litisconsorte Facultativo, remitiéndose a los fundamentos expresados en la Resolución Nº 13 para sustentar su decisión.

I. CONTESTACIÓN DE DEMANDA SACIP:

2.18. Mediante su escrito de fecha 14 de setiembre de 2011, SACIP cumple con apersonarse al proceso y contesta la demanda, negándola en todos sus extremos, en función a los siguientes argumentos de hecho y derecho:

- SACIP señala en primer lugar que en ningún momento se ha afectado el derecho de propiedad del demandante, pues en el Laudo Arbitral cuestionado no se ha realizado acto de disposición alguno respecto a su derecho real. Sino que sólo se ha hecho actos de disposición respecto a la posesión del inmueble previamnete aludido al este ser el local físico donde opera la empresa SACIP.
- La razón de lo señalado en el párrafo prescedente es que SACIP debía de cumplir con ciertas obligaciones comerciales y societarias, de las cuales la señora Blanca Rosa Paredes Córdova tomó conocimiento una vez se le otorgó la administración de la empresa y el inmueble aludido vía diversos procesos judiciales y, en una posterior, junta de accionistas , ya que antes de que esos diversos pronunciamientos judiciales lo hicieran posible, las acciones sobre la empresa SACIP (el 91% de las acciones) y el referido ionmueble, venían siendo deficientemente administrados por el demandante, quien sólo realizaba acciones en beneficio propio y no en beneficio de la sociedad, a la vez que buscaba amedrentar los derechos de todos los sucesores del causante Mario Paredes Cueva, quien en vida fue el propietario del 91% de las acciones de a empresa SACIP (el Camal de Yerbateros) y del inmueble señalado previamente.

- Al respecto, también se aclara que no es que el demandante sea dueño del 91% de las acciones de SACIP sino que este es parte de la masa hereditaria que es dueña del 91% de las acciones de SACIP, así como parte de la masa hereditaria que ostenta la propiedad del inmueble ubicado en Ate.
- Ahora bien, respecto al proceso arbitral. SACIP señala que no se le incluyó en el mismo, al no ser el demandante una parte signante del acuerdo arbitral, pues los signatarios del mismo y del contrato que contenía el acuerdo arbitral eran única y exclusivamente las empresas SACIP y Flotal, las cuales fueron representadas por sus Gerentes Generales, como es usual en la realización de cualquier proceso entre personas jurídicas. Sobre el particular, SACIP señala que aceptar lo señalado por el demandante sería aceptar el absurdo de que ante cualquier conflicto que surja entre personas jurídicas, se tendría que notificar a todos los accionistas que son dueños de estas.
- De igual manera, mediante su escrito de contestación, SACIP señala que tampoco se ha llegado de afectar ninguno de los derechos aludidos por el demandante pues el Laudo Arbitral ni siquiera ha sido ejecutado. Es más, la ejecución del mismo viene siendo cuestionada en otro proceso por el mismo demandante, su empresa FRILISAC y por la señora René Perpetua Cueva de Yataco.
- Asimismo, en su escrito, SACIP alega que la demanda debe declararse improcedente, de conformidad con lo establecido por el artículo N° 5 del Código Procesal

Constitucional, al haber otra vía igualmente satisfactoria para cuestionar el Laudo Arbitral, como ha sido el cuestionamiento a la ejecución del Laudo Arbitral, el cual fue declarado por el juzgado competente como inejecutable, y así ha sido señalado y reconocido por el propio demandante. Y, porque no se han agotado las vías previas al amparo como son los cuestionamientos al acuerdo societario vía judicial, el recurso de anulación del laudo arbitral o un proceso de reivindicación o similares para recobrar la posesión del aludido inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo N° 45 del referido cuerpo normativo.

- Por todo lo señalado previamente, SACIP solicita se declare INFUNDADA la demanda en todos sus extremos, con expresa condena de costas y costos.

J. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE FLOTAL:

2.19. Con fecha 22 de setiembre de 2011, la empresa Flotal cumple con contestar la demanda, solicitando la misma sea declarada INFUNDADA en todos sus extremos con condena expresa de costas y costos, en función a los siguientes argumentos:

- La supuesta afectación de los derechos del demandante ya han sido vistos en otro proceso, siendo este el proceso de ejecución del Laudo Arbitral, donde se ha resuelto declarar al Laudo como INEJECUTABLE, tanto en primera como en segunda instancia. Por lo que, se habría comprobado la existencia de una vía igualmente satisfactoria donde se tutelen los derechos supuestamente afectados del demandante, teniéndose que declarar IMPROCEDENTE la demanda de Amparo,

de conformidad con lo establecido en el artículo N° 5 del Código Procesal Civil.

- Al respecto, Flotal señala que al haber obtenido la tutela de los derechos alegados como afectados mediante su demanda de amparo, corresponde que se declare improcedente la demanda. Máxime si se considera que la acción de amparo es un recurso excepcional, que debe utilizarse de última ratio, cuando no exista otra vía igualmente satisfactoria para solicitar la tutela de tus derechos constitucionales, lo cual no sucede en el presente caso donde el propio demandante ha acreditado la existencia de esta otra vía alterna, donde satisfactoriamente ha encontrado la tutela de sus intereses.

K. CUESTIONAMIENTOS A LA INCLUSIÓN DE SACIP Y FLOTAL AL PROCESO:

2.20. El demandante, mediante varios escritos cuestionó la inclusión de Flotal y SACIP como litisconsortes facultativos en el presente proceso, solicitando la nulidad de las resoluciones que ordenaban su inclusión, alegando que:

RESPECTO A SACIP:

- El demandante señala que la Resolución que ordena la inclusión de SACIP vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso pues; (i) se señala que se está incluyendo a SACIP de oficio cuando en realidad SACIP presentó un escrito para que se le incluyera en el proceso, (ii) se admitieron escritos en el cuaderno cautelar de este proceso, por parte de SACIP, cuando este aún no era parte del proceso y, por tanto,

no debería haber tenido conocimiento del mismo hasta que se le notifique con la medida cautelar que la involucraba, (iii) se derivaron escritos que iban dirigidos al cuaderno principal, al cuaderno cautelar, (iv) no se le permitió pronunciarse respecto a la inclusión de SACIP en el proceso antes de que esta se ordenara mediante Resolución y (v) su inclusión dentro del proceso, con la representación de la señora Blanca Rosa Paredes Cordova, contraviene lo resuelto por la misma jueza en el Cuaderno Cautelar pues en dicho cuaderno se reconoció que la administración de SACIP y del aludido inmueble debía de recaer en manos de René Perpetua Paredes Cueva de Yataco y no en manos de Blanca Rosa Paredes Cordova, suspendiéndose los efectos de cualquier acto que la reconociese como tal.

- Asimismo, mediante sus escritos, el demandante hace notar que, a su parecer, la jueza encargada del presente caso no estaría actuando con providad, conforme al principio de independencia e imparcialidad, al realizar actos que supuestamente demostrarían que esta se encontraba ilegítimamente velando por los intereses de la señora Blanca Rosa Paredes Cordova.

RESPECTO A FLOTAL

- Con respecto a Flotal también se interpone una apelación respecto a su incorporación al proceso como litisconsorte facultativo.

L. RESOLUCIÓN SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA INCLUSIÓN DE LOS LITISCONSORTES AL PROCESO:

2.21. Las solicitudes de nulidad de las Resoluciones N° 13 y 14, las cuales ordenaban la inclusión de SACIP y Flotal dentro del proceso, fueron declaradas IMPROCEDENTES ya que el recurso para cuestionar una Resolución no es la nulidad sino la Apenalación del Auto.

M. ABSOLUCIÓN A LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE SACIP:

2.22. Mediante su escrito de fecha 30 de setiembre de 2011, el demandante procede a absolver el escrito de contestación de demanda presentado por SACIP, rechazándolo en todos sus extremos.

N. ABSOLUCIÓN A LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE FLOTAL:

2.23. Mediante su escrito de fecha 06 de octubre de 2011, el demandante procede a absolver el escrito de contestación de demanda presentado por Flotal, negándolo en todos sus extremos.

O. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

2.24. La Resolución N° 47 de fecha 27 de octubre del año 2011, contiene la sentencia de primer instancia del presente proceso. En esta, se resolvió declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo interpuesta por Giovanni Mario Paredes Ruiz, en cuanto a la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, ordenándose reponer las cosas al estado anterior del proceso arbitral cuestionado y a la emisión del Laudo Arbitral contenido en la Escritura Pública de Protocolización del Laudo Arbitral otorgado por Luis Alberto Livelli Matos, ante el Notario Público, el señor Walter Pinedo

Orrillo, el 12 de marzo de 2010, dejándose sin efecto el aludido proceso arbitral y el Laudo emitido. Asimismo, en dicha sentencia, se declaró INFUNDADA la demanda en cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad y la condena de costas y costos en perjuicio de los demandados. Todo ello, se resolvió bajo los siguientes fundamentos:

- Primero, respecto a la procedencia de la demanda, el juez señaló que ya que el demandante había visto vulnerados sus derechos constitucionales, como son el derecho de propiedad, de defensa y del debido proceso, y siendo que este no fue parte del convenio arbitral ni su condición de tercero se encontraba comprendida dentro del supuesto previsto en el artículo N° 14 del Decreto Legislativo N° 1071, de conformidad con lo establecido en el precedente vinculante contenido en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC), correspondía admitir a trámite la demanda.
- Al respecto, también se señaló que si bien en el proceso de ejecución del laudo se había declarado la inejtabilidad del laudo arbitral, ello no permitía que se retrotraigan los afectos al estado de las cosas antes de la instalación del proceso arbitral, lo cual sí se podía ordenar mediante el proceso de amparo, por lo que sí correspondía declarar la procedencia del presente proceso.
- Ahora, respecto a la vulneración del derecho de defensa y al debido proceso, el juez señaló que al no habersele permitido participar en el proceso arbitral al demandante, siendo este accionista mayoritario de la empresa SACIP y siendo propietario del inmueble aludido, se le estaría vulnerando sus garantías constitucionales previstas en

los incisos 3 y 14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, al haber tenido legítimos intereses en juego dentro del proceso y, sin embargo, negándosele ser parte del mismo.

- Por último, respecto a la vulneración del derecho de propiedad, el juez señaló que este no se tenía por vulnerado ya que el Laudo Arbitral cuestionado no atentaba contra el contenido esencial del derecho de propiedad, entendiéndose por esto, el derecho a usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien que el de tu propiedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 2º inciso 16 y 70º de la Constitución Política del Perú, al este sólo afectar la posesión sobre el bien, la cual se encuentra fuera de los supuestos constitucionalmente reelevantes respecto al derecho de propiedad.

P. APELACIÓN DE LA SENTENCIA POR PARTE DE SACIP:

2.25. Mediante su escrito de fecha 04 de noviembre de 2011, SACIP apela la sentencia de primera instancia en el extremo que declaró fundada la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, por los siguientes argumentos:

- SACIP señala que la supuesta vulneración de los derechos del demandante no existe porque lo resuelto en el laudo arbitral se da en función a la relación contractual que había entre SACIP y Flotal, donde éste no intervino, y que el hecho de que él sea accionista de SACIP resulta irrelevante.
- Ahora, respecto al acto de disposición sobre el inmueble, la entrega de libros y la entrega de la

administración del Camal de Yerbateros, SACIP señala que al final esto no se efectuó porque el laudo fue declarado inejecutable en la vía de ejecución del laudo arbitral.

- De igual manera, SACIP alega que el proceso debe declararse improcedente porque el demandante y su empresa FRILISAC ya ejercieron su derecho de cuestionar el laudo vía proceso de ejecución del laudo arbitral, habiéndose así configurado el supuesto de otro vía igualmente satisfactoria donde el demandante puede solicitar la tutela de sus derechos constitucionales.
- En la misma línea de ideas, SACIP señala que existen otras vías previas a las cuales el demandante debió recurrir antes de interponer el recurso de amparo, como la impugnación de acuerdos societarios y/o la utilización del recurso de anulación del laudo arbitral ante los juzgados comerciales. Por lo que, por ello también se debería declarar improcedente el amparo.

Q. RESOLUCIÓN DE LA APELACIÓN – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

2.26. Con fecha 28 de junio de 2012, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la Resolución N° 5 en el expediente N° 14045-2010, resolvió REVOCAR la sentencia de fecha 27 de octubre de 2011, contenida dentro de la Resolución N° 47, y procedieron a REFORMARLA, declarandola IMPROCEDENTE, por el siguiente fundamento:

- Los jueces en este caso alegaron que para efectos de determinar si se habría producido una efectiva

afectación al derecho de defensa y del debido proceso del demandante, se tendría que determinar primero si este debió ser notificado con el inicio del proceso arbitral y si esta firmó o no el convenio arbitral, cuestiones que no pueden ser determinadas en un proceso de amparo pues este carece de una estación contradictoria de pruebas, estas cuestiones requieren ser vistas en un proceso civil ordinario. Por lo que, claramente la vía del amparo no es la vía idónea para dirimir la referida controversia, debiéndose declarar IMPROCEDENTE la demanda.

R. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL DEMANDANTE:

2.27. Con fecha 31 de julio de 2012, el demandante presenta un recurso de agravio constitucional ante la Resolución N° 5 de fecha 28 de junio de 2012, alegando que esta presenta graves errores fácticos y jurídicos y, además, denunciando que esta se aparta del fundamento 21 literal c del precedente recaído en el expediente N° 142-2011-PA/TC. Por lo que, solicita se conceda a trámite su recurso, elevándolo al Tribunal Constitucional para que este la revoque y la reforme, declarando fundada su demanda en todos sus extremos. Todo ello, bajo los siguientes argumentos:

- En primer lugar, el demandante señala que el hecho de que él no forma parte del convenio arbitral no es un hecho controvertido, tanto él como los demandados lo han reconocido durante el proceso, y, por tanto, ello no debe estar sujeto a probanza ni debe ser ello utilizado como causal para declarar la improcedencia del recurso de amparo.

- Como segundo punto, el demandante señala que el juez de segunda instancia no aplica el precedente vinculante recaído en el expediente N° 000142-2011-PA/TA, inobservando así los supuestos de procedencia de la demanda de amparo contenidos en el numeral 21 de la referida sentencia, dejándolo en un estado de indefensión absoluta al ser la única vía posible, para efectos de tutelar sus intereses, la del Amparo.
- Asimismo, precisa que el recurso de anulación del laudo arbitral sólo está diseñado para las partes que suscribieron el convenio arbitral y él no lo suscribió, no pudiendo recurrir a la utilización de este recurso. Su situación no se encuentra prevista dentro de los supuestos señalados en la norma para efectos de poder interponer el aludido recurso.
- Finalmente, reafirma la vulneración a los tres derechos constitucionales señalados a lo largo del todo el proceso.

S. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

2.28. Con fecha 28 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional resolvió mediante voto en mayoría declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la violación de los derechos de propiedad y al debido proceso y, en consecuencia, declaró NULOS los actos inscritos en la Partida N° 11022358 como consecuencia del laudo arbitral contenido en la escritura pública de protocolización otorgado por don Luis Alberto Livelli Matos ante Notario Público, el señor Walter Piñedo Orrillo. Asimismo, se ordenó que el referido laudo sea ineficaz, inejecutable y no produzca efectos de cosa juzgada, por los siguientes fundamentos:

- El Tribunal Constitucional resuelve en su sentencia que efectivamente se vulneró el derecho de propiedad, de defensa y el debido proceso del demandante al, en primer lugar, no habersele incluido como tercero interesado en el proceso arbitral pese a que este era propietario del bien inmueble que era parte de la controversia arbitral y siendo que este debía administrar este inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo N° 671 del Código Procesal civil.
- Asimismo, el Tribunal señala en su sentencia que no se le puede pretender oponer a alguien una sentencia respecto a un proceso donde no sólo no se le ha permitido su participación sino que tampoco se le notificó de la existencia del mismo, no permitiéndole ejercer su derecho de defensa durante el desarrollo de este.
- Además, el Tribunal señaló que sí se estaría afectando el derecho de propiedad del demandante mediante el laudo arbitral al limitar el uso y goce que el demandante tiene sobre el bien inmueble de su propiedad mediante la cesión indefinida de la posesión del aludido inmueble en favor de Flotal.
- Finalmente, el Tribunal precisó que para que se respete el derecho al debido proceso de las personas, se les debe dar la posibilidad de defenderse en el mismo, en la forma que consideren conveniente, lo cual no ocurrió en el caso concreto. Por lo que, se habría vulnerado efectivamente el derecho de defensa y al debido proceso del accionante.

2.29. Por su parte, el magistrado Urviola Hani emitió su voto singular, mediante el cual señalaba que a su parecer debería declararse FUNDADA la demanda y, en consecuencia, debía declararse nulo el respectivo laudo arbitral, debiéndose expedir uno nuevo con conocimiento del accionante, bajo los siguientes argumentos:

- El magistrado Urviola Hani señala que, de conformidad con lo establecido en el precedente vinculante recaído en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC, efectivamente procedía el amparo, al haberse configurado la causal c) establecida en el punto 21 del referido precedente. Pero no sólo ello sino que, siendo que la sentencia se declaró fundada, se debió declarar la nulidad del laudo y ordenar que se emita uno nuevo de conformidad con lo señalado en la referida jurisprudencia.
- De igual manera, en su voto singular el magistrado señala que era evidente, con las pretensiones que se discutían en la proceso y con los acuerdos transaccionales que se homologaron en el laudo, que se iba a vulnerar los intereses del demandante, al este ser este propietario del inmueble y de los activos que eran objeto de la controversia. Por lo que, era obvio que antes de emitirse el laudo arbitral, se le debió notificarle del proceso y pedirle que exprese lo conveniente a su derecho. Sin embargo, ya que esto no se hizo, se configuró una clara vulneración al derecho de propiedad, de defensa y el debido proceso del accionante.

2.30. Por último, el magistrado Calle Hayen también emitió su voto singular, señalando que a su parecer debía de declararse IMPROCEDENTE la demanda de amparo arbitral, por los siguientes argumentos:

- El magistrado Calle Hayen señaló que al haberse resuelto en la vía Civil con Sub Especialidad en lo Comercial que el laudo era inejecutable, al reconocerse que efectivamente al no haber participado el demandante en el proceso se le habría vulnerado sus derechos constitucionales a la propiedad, la defensa y el debido proceso, ya no tiene razón de ser el proceso de amparo, pues ya no habría afectación alguna contra el accionante, teniendo en cuenta que el laudo arbitral ya no puede desplegar ningún tipo de efecto jurídico.
- En ese sentido, siendo que ya no habría actualmente algo que afecte los derechos constitucionales del demandante, el proceso de amparo no debe seguirse y, por tanto, debe declararse la improcedencia del mismo.

III. TEMAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES:

a. La admisibilidad del recurso de Amparo Arbitral:

El primer tema jurídicamente relevante que identifiqué en el presente caso es el tema de la admisibilidad del recurso de amparo, cuestión que resulta ser bastante controvertida pues es el primer cuestionamiento que realizan las partes al presente proceso y es la causal de que, en un primer momento, se haya decidido declarar la improcedencia y, consecuente, culminación del presente proceso, decisión que, posteriormente, es apelada y revocada por el órgano de jerarquía superior.

b. Litisconsorcio:

El segundo tema relevante en el presente caso es la inclusión de dos partícipes en el proceso, en calidad de demandados, mediante

la aplicación de la figura del litisconsorte facultativo. Esta cuestión también va a ser controvertida pues la inclusión se señala de oficio, cuando aparentemente habría sido a pedido de parte y, además, resulta ser ampliamente cuestionada por el demandante, la utilización de esta figura, durante gran parte del proceso.

c. El recurso de Amparo Arbitral:

Finalmente, el último tema jurídicamente reelevante y controvertido que vemos en el presente caso es la utilización del recurso del amparo, cuestión que resulta siendo controvertida hasta la finalización del proceso pues la sentencia del Tribunal Constitucional se da por voto en mayoría con dos votos singulares.

Asimismo, cabe resaltar sobre el particular que no sólo es controvertida la resolución sobre el fondo de la controversia, es decir respecto a si se debe declarar fundada o infundada la demanda, sino que también se cuestiona ampliamente hasta el final si efectivamente procedía la aplicación de este recurso tan excepcional de nuestro ordenamiento jurídico.

IV. MI POSICIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS TEMAS JURÍDICOS RELEVANTES:

a) Respecto a la admisibilidad del recurso de Amparo Arbitral:

En este caso, vemos que hubo gran controversia respecto a la admisibilidad del recurso de amparo arbitral. En un primer momento, el juez competente declaró improcedente el recurso, alegando que había otras vías igualmente satisfactorias en las cuales se podía tramitar la afectación de los derechos del demandante como es la vía del proceso de anulación del laudo, que es competencia de los jueces de las Salas Civiles con Sub especialidad en lo comercial o, en su defecto, de las Salas Civiles.

Sin embargo, con un buen juicio, la Sala que vio la apelación de esta primera decisión señaló que no había otra vía igualmente satisfactoria, al no haber sido, el agraviado, parte del proceso arbitral y no haber podido, en su momento, manifestar la afectación que se le estaba ocasionando ni haber podido aplicar el remedio de la solicitud de nulidad del laudo arbitral.

Al respecto, también señalamos que, ya en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, este aplicó el primer precedente vinculante en esta materia, el cual es el conocido Caso Minera María Julia (Exp. N° 00142-2011-PA/TC), en el cual se estableció una lista con supuestos taxativos en los cuales procedía el recurso de amparo arbitral.

En las siguientes líneas analizaremos todas las posibles vías alternativas, para efectos de determinar si, en efecto, la única vía posible a la que podía recurrir el demandante era la vía del amparo arbitral.

Pues bien, antes de comenzar con este análisis, considero conveniente realizar ciertas afirmaciones.

Primero, resalto que la Constitución Política, como norma de mayor jerarquía (siguiendo lo establecido por la pirámide de Kelsen), rige en todo nuestro ordenamiento jurídico y , por tanto, el respeto de la misma y de los derechos constitucionales contenidas en esta, son una directriz máxima que deben seguir todos los operadores del derecho. En palabras del Tribunal Constitucional: *“los derechos constitucionales informan y se irradian por todos los sectores del ordenamiento jurídico (...) pues ellos forman parte esencial del orden público constitucional”*¹

¹ STC N° 00976-2001-AA/TC. Fundamento N° 5.

En esta línea de ideas, resulta lógico afirmar que cuando alguien señala la vulneración de alguno de sus derechos constitucionales, como son el de propiedad, defensa y debido proceso, este pueda recurrir a la utilización de los recursos previstos por nuestra normativa para efectos de tutelar la prevalencia de los mismos.

Y, así, precisamente, lo señala el artículo N° 2 de nuestro Código Procesal constitucional, el cual establece que:

“Artículo 2.- Procedencia

*Los procesos constitucionales de hábeas corpus, **amparo** y hábeas data **proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.** Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.”* (el subrayado y el énfasis es mío)

Sin embargo, nuestro ordenamiento, con el fin de no saturar la vía constitucional, ha dispuesto supuestos taxativos en los cuales procede y no procede recurrir a esta vía, teniéndola como una última ratio ante la efectación de un derecho constitucional. Al respecto, también hay que considerar que, en la vía de la: “jurisdicción ordinaria, aunque trate asuntos de jerarquía inicialmente legal o negocial (contractual), no es ajena a la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. En su seno es posible tutelar, con importantes y satisfactorios alcances, diversos derechos de rango constitucional.”²

² Juan Manuel Sosa Sazio. La improcedencia del Amparo por existir “vías específicas e igualmente satisfactorias”. Pg. 145

Como veremos a continuación, nuestro ordenamiento jurídico, en el inciso 2 del artículo N° 5 del Código Procesal Constitucional, regula los supuestos de improcedencia del amparo arbitral:

“Artículo N° 5.- Causales de improcedencia

No proceden los procesos constitucionales cuando:

(...)

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de *habeas corpus*.

(...)” (el subrayado y el énfasis es mío)

Ante este escenario, corresponde preguntarnos si, en efecto, existe una vía igualmente satisfactoria a la del amparo arbitral a la cual el demandante pudo recurrir a fin de proteger sus derechos agraviados.

En este caso, nos encontrábamos ante un Laudo Arbitral que afectaba los derechos del demandante. Por lo tanto, corresponde evaluar si la vía del recurso de anulación del laudo arbitral, era la vía idónea para lograr el cese de esta afectación.

Para ello, nos remitimos a los artículos N° 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje).

El primero de ellos señala lo siguiente:

“Artículo 62.- Recurso de anulación.

1. **Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63.**

2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.” (el subrayado y el énfasis es mío)

Y, si procedemos a ver los supuestos establecidos en el artículo N° 63 de la referida norma, veremos que el demandante no encaja en ninguno pues este no fue parte del proceso ni tuvo conocimiento del mismo hasta que este estuvo concluído y se buscó su ejecución.

Al respecto, la profesora Rita Sabroso señala que:

“Ahora bien, cuando **los efectos del laudo arbitral se pretenden extender a terceros que no participaron en el arbitraje y no ejercieron su derecho de defensa, no podríamos recurrir a la anulación del laudo, dado que dicho mecanismo de impugnación está únicamente pensado para aquellos que fueron parte del proceso arbitral.** En efecto, el artículo 63 de la Ley de Arbitraje parte del supuesto de hecho de que para acudir a la anulación del laudo, la causal invocada haya sido objeto de reclamo expreso por la parte ante el Tribunal Arbitral y haya sido desestimado. Obviamente, un tercero no cumpliría con el referido supuesto de hecho.”³ (El resaltado y el énfasis es mío)

³ Mario Castillo, Rita Sabroso, Jhoel Chipana y Laura Castro, “Ley de Arbitraje. Análisis y Comentarios a diez años de su vigencia”, Gaceta Jurídica, 2018.

Por su parte, Frank García Ascencios señala lo siguiente:

*“En la problemática objeto de análisis, **el tercero al no ser parte, no puede plantear la anulación, medio impugnatorio en el arbitraje, por lo que, al no haber ninguna otra vía preestablecida para este, entonces podrá ir de manera directa al amparo**, donde el tercero deberá argumentar que se le ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva, y por ello al debido proceso, pues no ha podido hacer uso de su derecho de defensa en un proceso judicial, **tratándosele de obligar a acatar un laudo arbitral, decisión ajena a él, pues al ser un tercero nunca celebró un convenio arbitral para someterse a la competencia de los árbitros**.”⁴ (el resaltado y el énfasis es mío)*

Entonces, ya que se tiene claro que la vía de la anulación del laudo, no era la vía idónea para que el demandante pueda exigir la tutela de sus derechos. Pasamos a analizar si, ante estas circunstancias, nuestro ordenamiento jurídico nos permite recurrir a la vía del amparo arbitral.

En el Perú, se ha reconocido que las fuentes del Derecho son la ley, la doctrina, la jurisprudencia y los usos y costumbres. En ese sentido, ante un vacío o inexactitud legal, los jueces pueden recurrir a la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre a efectos de sostentar su decisión.

Esto último es lo que precisamente sucedió en este caso, donde el Tribunal Constitucional aplicó el precedente vinculante Maria Julia para sustentar la procedencia del recurso de amparo. Y, ¿Qué señala esta jurisprudencia?

⁴ Frank Gacía Ascencios. “*Amparo versus arbitraje. Improcedencia del amparo contra laudos arbitrales*”, Editorial ADRUS, 2012.

En el caso Maria Julia se deja establecido de forma taxativa y, por ende, limitativa, las causales por las cuales específicamente procede recurrir a la vía del amparo arbitral. Así, tenemos que en el fundamento N° 21 de la referida sentencia se dispuso que:

“21. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 5º inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.

b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14º del Decreto Legislativo N.º 1071.

En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de la vía previa para la procedencia del amparo.

La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos indicados en el presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia. En ningún caso el juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje.”⁵ (el subrayado y el énfasis es mío)

Y, en este caso, vemos que las circunstancias del accionante efectivamente calzan dentro del supuesto c) del fundamento 21 del aludido expediente, pues estamos ante un demandante que: (i) no ha formado parte del proceso arbitral, (ii) que ha tenido una manifiesta y directa afectación de sus derechos constitucionales y (iii) que no se encuentra comprendido dentro de la artículo N° 14 del Decreto Legislativo N° 1071.

Respecto al primer punto, señalo que no ha sido un punto controvertido en el proceso el hecho de que el demandante no haya sido parte del proceso arbitral, al haber este demostrado ello mediante el aporte del laudo arbitral al proceso constitucional y al haberlo afirmado, sin cuestionamiento alguno, los demandados del presente proceso.

Al respecto, el profesor Giovanni Priori Posada señala que: “Es claro que si alguien no ha sido parte del convenio, ni del proceso, con mayor razón debe poder plantear una demanda de amparo.”⁶

Respecto al segundo punto, afirmo que, en efecto, hubo una manifiesta y directa afectación de los derechos constitucionales (propiedad, defensa y debido proceso) del demandante, lo cual fue

⁵ STC N° 00142-2011-PA/TC. Fundamento N° 21.

⁶ Giovanni F. Priori Posada. El control de constitucionalidad de laudos arbitrales en el Perú, a la luz de lo señalado en el precedente vinculante 142-2011-PA/TC. Pg. 33

demostrado mediante el aporte del laudo arbitral a este proceso, ya que en este se ve que se han realizado actos de disposición indefinidos respecto a bienes que son de propiedad del demandante y, en un proceso, donde no se le ha dado la posibilidad de alegar lo conveniente a sus intereses para poder impedir futuros actos de disposición respecto a los mismos.

Finalmente, respecto al tercer punto, señalo que el demandante tampoco se encuentra previsto dentro del artículo N° 14 del Decreto Legislativo N° 1071, pues este no ha sido incluido al proceso como parte no signataria, figura que regula el referido artículo, ni cumple con los requisitos para serlo.

Respecto a este artículo, el profesor Alfredo Bullard nos señala que:

“El artículo 14º, (...), da una base para una interpretación que permita incluir dentro del convenio a personas que, sin haberlo suscrito, han consetido su contenido.

(...). El artículo 14º permite la incorporación de partes no signatarias, es decir de alguien que es parte del convenio, pero que por alguna razón no lo firmó o no aparece mencionado en el mismo. (...).”⁷ (el subrayado y énfasis es mío)

Por todo lo dicho, podemos afirmar que el demandante calza dentro del supuesto contenido en el inciso c) del fundamento 21 del caso María Julia y, en consecuencia, su demanda de amparo resulta procedente, como bien lo señaló el Tribunal Constitucional en el presente caso.

⁷ Carlos Alberto Soto Coaguila y Alfredo Bullard González. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo I. Instituto Peruano de Arbitraje. Lima: 2011. Pg. 202.

Ahora bien, antes de cerrar este punto, considero pertinente hacer un breve análisis respecto a si, como señalaron los demandados en este caso, el hecho de que el laudo se haya declarado como inejecutable, hace que la tramitación del recurso de amparo sea innecesaria, al supuestamente ya haber cesado la afectación a los derechos constitucionales.

Cuando se tiene un laudo, uno tiene que recurrir a la vía del proceso de ejecución para efectos de que este pueda surtir sus efectos, ósea para que sea eficaz, y así la parte vencedora del arbitraje tenga una tutela jurisdiccional efectiva.

Pero, si el mismo es declarado inejecutable, este no llegará a surtir sus efectos. Sin embargo, que no surta sus efectos no quiere decir que el estado de las cosas se van a retrotraer al momento anterior al vicio que causó su inejecución, sólo quiere decir que estamos ante un título ejecutivo, el laudo, que es válido pero ineficaz.

En el caso que nos ocupa, el Laudo fue declarado ineficaz por reconocerse que efectivamente se había vulnerado los derechos constitucionales (de defensa, debido proceso y propiedad) del demandante, al no haber sido parte del proceso y, aún así, haber dispuesto de bienes de su propiedad. Pero, no se declaró que se retrotraigan las actuaciones pues el juez comercial que ve la ejecución del laudo, no se encuentra facultado para realizar dicha acción. Sólo mediante la vía de anulación del laudo o mediante la acción de amparo es que se pueden obtener dichos efectos.

En esa línea de ideas, podemos afirmar que si bien el laudo se declaró inejecutable, ello no impide que se tramite el amparo arbitral, ya que ambos procesos tienen fines y consecuencias distintas. El proceso de amparo no sólo va a hacer que el Laudo sea declarado ineficaz sino también inválido y va a permitir que se

ordene que los hechos se retrotraigan hasta antes de la comisión de la afectación a los derechos del accionante.

En palabras del profesor Rafael Viera:

“(...) si existe vía procesal específica pero no es igualmente satisfactoria para tutelar el derecho constitucional vulnerado o amenazado, el proceso de amparo procede y debe ser tramitado.”⁸

Por todo lo dicho, señalo que estoy de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Arbitral, en su oportunidad, respecto a la procedencia del recurso de amparo arbitral.

b) Respecto al litisconsorcio:

En el presente caso encontramos que se aplicó la figura del litisconsorte facultativo para efectos de incluir de oficio al proceso a las empresas SACIP y Flotal en calidad de demandados, mediante las Resoluciones N° 13 y 14 del Cuaderno Principal.

Ahora bien, para proceder con el análisis de este acto procesal, considero que es reelevante que vayamos por pasos, empezando con definir qué es la figura del litisconsorcio.

El litisconsorcio, o la también llamada acumulación subjetiva de procesos, se da cuando hay más de dos sujetos como una parte, es una situación que involucra una pluralidad de sujetos en una situación jurídica procesal, ya sea como demandante o como demandado.

⁸ Rafael Viera Arévalo. Aspectos Procesales del Amparo. Revista N° 49: Ius et veritas. Lima: 2014. Pg. 170.

En palabras del profesor Montero Aroca es un proceso único con pluralidad de partes: *“Estamos ante un proceso único cuando dos o más personas se constituyen en él en la posición de actor o en la de demandado, estando legitimadas para ejercitar u oponerse a una única pretensión, de modo tal que el órgano jurisdiccional ha de dictar una única sentencia, en la que se contendrá un pronunciamiento único, que tiene como propiedad inherente al mismo el afectar a todas las partes por igual.”*⁹

Nuestro Código Procesal Civil regula esta figura en su artículo 92º el cual señala que:

“Artículo 92.- Litisconsorcio activo y pasivo

Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra.” (el subrayado y el énfasis es mío)

Pues bien, como podemos apreciar, la normativa hace una diferencia entre el litisconsorcio activo y el pasivo, siendo el primero cuando hay una pluralidad de personas en la posición de demandante y el segundo cuando hay una pluralidad de personas en la posición de demandado. En el presente caso nos encontramos ante un litisconsorcio pasivo pues estamos ante una pluralidad de demandados.

Ahora, dentro de esta figura, tenemos que hay sub categorías, siendo estas; (i) el litisconsorcio necesario, (ii) el litisconsorcio cuasi necesario y (iii) el litisconsorcio facultativo, respecto a los

⁹ Juan Montero Aroca. La Legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. Revista: lux et Praxis. Lima.Pg. 18.

cuales pareciera que nuestra legislación sólo regula el necesario y el facultativo. Sin embargo, veremos, al explicar la figuras, que indirectamente el cuasi necesario también se encuentra regulado por nuestro ordenamiento jurídico.

Pues bien, pasaré a explicar la diferencia de cada una de estas sub categorías.

Primero, respecto al litisconsorcio necesario, este se da cuando la decisión del proceso recae en todos los litisconsortes salvo decisión en contrario, para lo cual habrá que evaluar dos cuestiones; primero, el derecho que se está discutiendo y, segundo, ver quiénes son los titulares del derecho. Una cuestión importante a tener en cuenta en esta sub categoría es que todos los sujetos son titulares en forma común de una o más pretensiones y que la falta de uno de ellos en el proceso, invalida automáticamente la sentencia, pues se considera que se estaría vulnerando el derecho de defensa de esa persona.

Es tan importante esta categoría de litisconsorte que el ordenamiento jurídico, reconociendo su vital importancia, faculta al juez a traer de oficio al litisconsorte necesario, pudiendo suspender el proceso, de ser necesario, para que este tenga la posibilidad de apersonarse al proceso.

La regulación de esta categoría se encuentra contenida en los artículos 93º y 95º del Código Procesal Civil, los cuales señalan a la letra lo siguiente:

“Artículo 93.- Litisconsorcio necesario

Quando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de

litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario.”

“Artículo 95.- Facultades del Juez respecto del litisconsorcio necesario

En caso de litisconsorcio necesario, el Juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar.

Si carece de la información necesaria, devolverá la demanda y requerirá al demandante los datos para el emplazamiento al litisconsorte.

Si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal.”

En segundo lugar, tenemos al litisconsorcio cuasi necesario, en el cual, por disposición de la ley, se permite que sólo uno de los litisconsortes se apersona pero igual a todos se les va a oponer la sentencia. Entonces, todos los litisconsortes pueden participar en el proceso pero no es necesario que estén todos pues igual la sentencia les será oponible. Por lo que, se puede afirmar que todos los sujetos son titulares de los intereses pero la ausencia de uno no invalida la sentencia.

Esta figura se encuentra prevista en la última parte del artículo 93º del cuerpo normativo citado previamente, veámos:

“Artículo 93.- Litisconsorcio necesario

*Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, **sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario.***” (el subrayado y el énfasis es mío)

Como vemos, la normativa sí regula esta sub categoría pero dentro del mismo artículo que regula la categoría del litisconsorcio necesario.

Por último, tenemos la sub categoría de litisconsorcio facultativo, en la cual la pluralidad de litigantes son independientes entre si. Entonces, los actos que realice cada uno no afecta a los demás litisconsortes, por lo que cada parte suele presentar sus propios alegatos y sus propios medios probatorios.

Esta última sub categoría de litisconsorte se encuentra regulada por el artículo 94º del Código Procesal Civil, el cual establece que:

“Artículo 94.- Litisconsorcio facultativo

Los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.”

Entonces, ya que tenemos un panorama claro de esta figura jurídica, pasamos a analizar lo sucedido en el caso concreto:

En este caso, tenemos que el juez competente incluyó a las empresas SACIP y Flotal al proceso en calidad de litisconsortes facultativos de oficio. Sin embargo, considero que la figura por la cual debió incluirseles al proceso es por la figura del litisconsorte necesario.

Sustento mi posición en que; en primer lugar, no es que los actos que realice cada uno de los litigantes no iba a afectar a los otros litisconsortes sino todo lo contrario, lo que alegase cada uno de los litisconsortes pasivos iba a tener un impacto en todos lo demás pues el acto que se está cuestionando es precisamente un laudo arbitral, donde intervinieron tres sujetos (el árbitro único, SACIP y Flotal), las cuales se iban a ver necesaria y directamente afectadas en caso el laudo se declarase nulo y se retrotraigan las cosas al estado en que se encontraban al momento de instalarse el proceso arbitral, lo cual finalmente terminó ocurriendo.

En la misma línea de ideas, señalo que la figura a aplicar era la del litisconsorcio necesario pues no era posible llevar a cabo el proceso de amparo, conforme a derecho, sin la inclusión de SACIP y Flotal, al éstas tener intereses directamente vinculados en juego y, por tanto, tenían el derecho de ser parte del proceso y poder ejercer su derecho de defensa en el mismo, pues de lo contrario luego se podría cuestionar la validez de la sentencia del proceso de amparo.

Asimismo, me llama mucho la atención que en el proceso no se haya cuestionado la inclusión de oficio de los litisconsortes como facultativos, cuando la norma sólo permite que la inclusión se dé de oficio cuando estamos ante un caso de litisconsortes necesarios.

Finalmente, señalo que debía de aplicarse la figura del litisconsorcio necesario pues sin la presencia de SACIP y Flotal no podía llevarse a cabo el proceso, al estarse cuestionando en el mismo una sentencia, que daba calidad de cosa juzgada, a lo acordado en una transacción extrajudicial entre las referidas personas jurídicas. Por lo que, podemos afirmar que si de algo había certeza, es que los involucrados por dicho laudo iban a ser

afectados con la decisión que se diera en el proceso de amparo, lo cual hacía exigible su intervención en el mismo.

Por todo lo dicho, afirmo que a mi parecer no se debió de aplicar la figura del litisconsorte facultativo sino la del litisconsorte necesario.

c) Respecto al recurso de Amparo Arbitral:

Finalmente, procederemos a evaluar la decisión del Tribunal Arbitral respecto al fondo de la controversia, respecto a si hubo o no afectación de los derechos constitucionales de propiedad, defensa y debido proceso.

Para ello, considero conveniente iniciar definiendo al proceso de amparo. En palabras de Gerardo Eto: *“El amparo es un proceso constitucional autónomo de tutela de urgencia de derechos fundamentales, distintos a la libertad individual, y cuyo fin es reponer a la persona en el ejercicio del derecho ius-fundamental amenazado o vulnerado producto de “actos lesivos”, perpetrados por alguna autoridad, funcionario o persona.”*¹⁰

Entonces, tenemos que mediante este proceso, las personas pueden solicitar la tutela de sus derechos constitucionales vulnerados.

Ahora, ya que hemos superado el examen de admisibilidad del presente proceso, pasamos a realizar un análisis respecto a la afectación de cada uno de los derechos señalados por el demandante.

¹⁰ Gerardo Eto Cruz. El proceso constitucional de amparo en la Constitución de 1993 y su desarrollo. Pg. 146.

Iniciamos con el derecho de propiedad, el cual se encuentra reconocido en el inciso 16 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones en lo concerniente al contenido del derecho de propiedad, a qué debe entenderse como derecho de propiedad. Así, en los Expedientes N° 0008-2003-AI/TC (fundamento 26), N° 3773-2004-AA/TC (fundamento 3) y N° 9417-2005-AA/TC (fundamentos 3 y 5), el Tribunal ha establecido que el derecho de propiedad está conformado por las facultades que le permiten al propietario realizar los actos mínimos de uso, disfrute y disposición del bien de su propiedad.

En la misma línea, el profesor Juan Luis Avendaño nos señala que: *“La propiedad ha sido tradicionalmente un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. **Lo primero significa que confiere al titular todas las facultades posibles, esto es, las de usar, disfrutar y disponer del bien objeto del derecho.** Lo segundo quiere decir que, precisamente por ser absoluto o total, el derecho de propiedad no deja lugar o espacio para otro titular. **El derecho del propietario excluye así todo otro derecho incompatible con él** Es un derecho perpetuo, finalmente, porque no se extingue por el solo no uso, lo cual hace que la prescripción extintiva no afecte a la propiedad y que la acción reivindicatoria sea imprescriptible.”¹¹*

Entonces, tenemos que el derecho de propiedad comprende que el titular de este derecho, sea el único facultado para usar, disfrutar y disponer el bien. Sin embargo, en el laudo arbitral cuestionado, se realizan actos de disposición respecto a un bien inmueble propiedad del demandante sin si quiera otorgársele la posibilidad de tener conocimiento sobre dichos actos de disposición ni de

¹¹ Jorge Avendaño. El derecho de propiedad en la Constitución. Revista: Themis. Pg. 117

expresar lo conveniente a su derecho, pues en el mismo se resuelve transferir de manera INDEFINIDA a Flotal la posesión de un bien que es de propiedad del demandante, ósea de un bien de un tercero que no es parte del proceso arbitral. Por lo que, se estaría configurando una evidente vulneración al derecho de propiedad del demandante.

Nuestro ordenamiento jurídico no contempla ninguna previsión que permita a los árbitros o partes de un proceso arbitral, disponer de bienes sobre los cuales no ostentan titularidad, configurándose así una afectación del derecho de propiedad del titular de los mismos, cuando actos así se producen.

Por todo ello, podemos afirmar que sí se ha vulnerado el derecho de propiedad del demandante.

En segundo lugar, pasaremos a evaluar lo referente a los derechos a la defensa y al debido proceso, de manera conjunta al estar uno contenido dentro del otro.

La Constitución Política del Perú reconoce en su los incisos 3 y 14 del artículo 139° el derecho que tienen todas las personas al debido proceso y a una defensa. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el particular, como en los Expedientes N° 0003-2008-PI/TC (fundamento 6), N° 06149-2006-PA/TC y N° 6662-2006-PA/TC (fundamento 3), estableciendo que el derecho al debido proceso comprende la facultad de acceder a los órganos encargados de administrar justicia, el conjunto de garantías procesales y materiales del procedimiento propiamente dicho, y el derecho a tener una sentencia eficaz y firme.

En ese sentido, tenemos que dentro del derecho al debido proceso, está el derecho a acceder a los órganos encargados de administrar

justicia, como son los Tribunales Arbitrales, y el derecho a contar con todas las garantías procesales para ejercer tu derecho de defensa, dentro de los que se incluye ser notificado de un proceso donde se están discutiendo tus intereses, cuestiones que no se dieron en este caso.

En este caso, si bien es cierto que el demandante no había suscrito el convenio arbitral, que es, en palabras del profesor Francisco González de Cossio: “(...) *un contrato por virtud del cual dos o más partes acuerdan que una controversia, ya sea presente o futura, se resolverá mediante arbitraje.*”¹², ello no faculta al Tribunal ni a las partes de ese proceso a realizar actos de disposición en el mismo respecto a derechos que son titularidad de una persona ajena al proceso, pues de querer sostener lo contrario se estaría permitiendo la disposición de derechos no disponibles y sobre los cuales su titular no ha podido ejercer su derecho de defensa, lo cual contravendría lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico.

En razón de esto último es precisamente el porqué el Tribunal Constitucional señala que a una persona no se le puede oponer lo resuelto en un proceso donde no ha sido parte, pues este no ha tenido la oportunidad de defender sus intereses. En palabras del profesor Alfredo Bullar: “ los árbitros no tienen jurisdicción sobre esos terceros porque la jurisdicción ha sido un contrato y estos señores no tienen contrato. (...)el laudo para ellos no es oponible a ellos no se le puede ejecutar porque no están obligados por ese laudo ni por el convenio, ni por el contrato que lo originó.”¹³

Por lo que, se puede afirmar que bien hizo el Tribunal Constitucional en señalar que el pretender oponerle un laudo al demandante respecto a un proceso en el que no había sido parte,

¹² Francisco González de Cossio. Arbitraje. Editorial: Porrúa. Ciudad de México: 2018. Pg. 195.

¹³ Alfredo Bullard Gonzáles. Litigio Arbitral desde otra perspectiva. Editorial: Palestra. Lima: 2016. Pg. 434.

claramente denotaba una vulneración a su derecho de defensa y debido proceso.

V. CONCLUSIONES:

- En el presente proceso vemos una discusión muy interesante respecto a temas de amplia importancia jurídica como son la admisibilidad y fundabilidad del proceso de amparo, y la inclusión de personas mediante la aplicación de la figura del litisconsorcio.
- Asimismo, afirmo que, luego de haber realizado un análisis minucioso respecto a los temas jurídicos relevantes, concuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral. Pero, estoy disconforme con la forma en que se incluyó a SACIP y a Flotal al proceso, por los fundamentos aquí desarrollados.
- Finalmente, señalo que este caso es de amplia importancia jurídica pues es uno de los primeros casos donde se aplica el tan famoso precedente María Julia.

VI. BIBLIOGRAFÍA:

- Alfredo Bullard Gonzáles. Litigio Arbitral desde otra perspectiva. Editorial: Palestra. Lima: 2016.
- Carlos Alberto Soto Coaguila y Alfredo Bullard González. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo I. Instituto Peruano de Arbitraje. Lima: 2011.
- Francisco González de Cossio. Arbitraje. Editorial: Porrúa. Ciudad de México: 2018.
- Frank Gacía Ascencios. *“Amparo versus arbitraje. Improcedencia del amparo contra laudos arbitrales”*, Editorial Adrus, 2012.
- Gerardo Eto Cruz. El proceso constitucional de amparo en la Constitución de 1993 y su desarrollo.

- Giovanni F.Priori Posada. El control de constitucionalidad de laudos arbitrales en el Perú, a la luz de lo señalado en el precedente vinculante 142-2011-PA/TC.Pg.
- Jorge Avendaño. El derecho de propiedad en la Constitución. Revista: Themis.
- Juan Manuel Sosa Sazio. La improcedencia del Amparo por existir “vías específicas e igualmente satisfactorias”.
- Juan Montero Aroca. La Legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. Revista: lux et Praxis.
- Mario Castillo, Rita Sabroso, Jhoel Chipana y Laura Castro, *“Ley de Arbitraje. Análisis y Comentarios a diez años de su vigencia”*, Gaceta Jurídica, 2018.
- Rafael Viera Arévalo. Aspectos Procesales del Amparo. Revista Nº 49: lus et veritas. Lima: 2014.

VII. JURISPRUDENCIA:

- STC Nº 00976-2001-AA/TC.
- STC Nº 00142-2011-PA/TC.
- STC Nº 0003-2008-PI/TC
- STC Nº 06149-2006-PA/TC
- STC Nº 6662–2006–PA/TC
- STC Nº 0008-2003-AI/TC
- STC Nº 3773-2004-AA/TC
- STC Nº 9417-2005-AA/TC